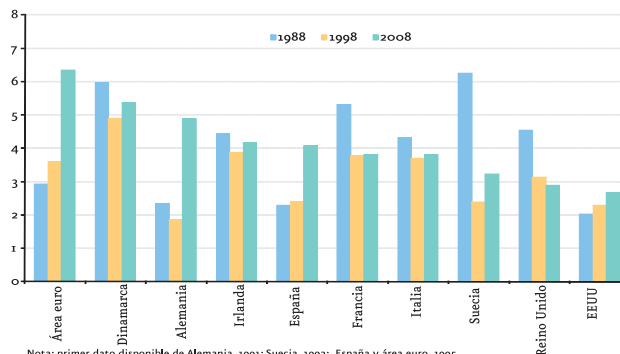


Más inversión pública, pero no más déficit

Sara Balaña

Inversión pública (% del PIB)



Nota: primer dato disponible de Alemania, 1991; Suecia, 1993; España y área euro, 1995.

Fuente: AMECO.

En los máximos del último ciclo expansivo, la inversión agregada de la economía española llegó a alcanzar casi el 31% del PIB, con un volumen anual del orden de los 325.000 millones de euros. Cuando estas cifras se ponen en contraste con las de las economías de su entorno, el proceso inversor acometido en la última década en España gana importancia relativa y equipara su comportamiento al de economías emergentes en expansión como la República Checa o Turquía, mientras que lo aleja de las europeas tradicionales como Francia o Alemania.

Hogares, a través de la compra de vivienda, y empresas, relanzando la inversión en bienes de equipo y obra no residencial (oficinas, almacenes, centros comerciales, etc.), han sido los principales responsables del repunte de la tasa de inversión, que, a principios de la presente década, apenas alcanzaba el 25% del PIB, y también los artífices de la corrección que ha experimentado en los dos años que llevamos de crisis. Sin obviar la menor importancia relativa de la inversión del sector público, su papel, antes y ahora, merece especial mención. Adecuar el nivel de *stock* de capital por habitante al de la media europea exigía del compromiso de las Administraciones públicas con la inversión en infraestructuras. En 2008, la ratio sobre PIB de inversión pública se situaba, según datos de AMECO, en el 4%, duplicando las cotas de finales de la década de los noventa y en línea con los registros de Francia, Italia o Irlanda.

Desde entonces, el sector público ha intentando amortiguar el impacto del desplome de la actividad privada, manteniendo las cifras de licitación y adoptando programas *ad hoc*, que, al margen de su eficacia a medio plazo, sí han suavizado las tasas de caída, ya de por sí muy elevadas, de la inversión agregada.

La recuperación de las decisiones de inversión privada tardará en producirse: el ajuste del mercado inmobiliario todavía exige tiempo y, mientras no recircule la financiación a las pymes (parte de las iniciativas recogidas en el Pacto de Zurbano y aprobadas recientemente van orientadas a reducir las trabas a la financiación de pymes y autónomos) y se despeje el escenario de consumo, las empresas seguirán retrasando sus proyectos de inversión. La participación del sector público en la economía parece erigirse como tabla de salvación y lo sería si no estuviese limitada por un déficit público que ha cerrado 2009 por encima del 11% del PIB. Los programas de consolidación propuestos para revertir la posición de las finanzas públicas contemplan recortes en la inversión pública significativos, que pueden suponer un lastre relevante para la salida de la crisis. La búsqueda de fórmulas de financiación público-privadas constituye la esencia del nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras para el período 2010-12. Empiezan gastando las empresas concesionarias y el sector público se compromete a devolverle los fondos a partir de 2014, cuando el fantasma del déficit ya no amenace. Una buena noticia si el plan llega a buen puerto ::